



EL COIP Y LA ZONA GRIS EN EL ECUADOR

*Diagnóstico jurídico-estratégico y
propuesta de reforma*

General Oswaldo Moreno
ASOCID – ECUADOR
Quito, 9 de abril de 2026



Método Mental Sistémico by Osmov 5D, AAI

Cuando la conducción del conflicto armado se vuelve incierta, los comandantes reconocen que entran en lo que Clausewitz denominó la “niebla de la guerra”: la confusión que impide comprender con claridad el desarrollo real de los acontecimientos. A ello se suma la “fricción de la guerra”, que explica por qué los planes rara vez se ejecutan como fueron concebidos.

*Desde la perspectiva jurídica militar, este espacio se traduce en lo que denominamos la **zona gris jurídica**: un territorio de indefiniciones donde los policías cumplen misiones militares, los militares asumen funciones policiales, los políticos intervienen en las competencias propias de los generales; y, los generales se ven obligados a navegar entre el orden y el caos bajo presión política.*

General Oswaldo Moreno
I Convención Hemisférica en Seguridad y Defensa
Madrid-18 de septiembre de 2025

QUITO — Ecuador enfrenta actualmente una asimetría crítica entre la norma internacional y la fenomenología criminal interna. La declaratoria de un **Conflicto Armado Interno (CANI)** ha generado un escenario en el cual las fuerzas estatales operan bajo lógicas de guerra, pero son juzgadas bajo marcos jurídicos diseñados para contextos de paz.

Esta tensión ha colocado al Estado en una **zona gris estructural**, donde la legalidad vigente resulta insuficiente para enfrentar amenazas criminales transnacionales, desestructuradas e intermísticas, orientadas al control territorial y al debilitamiento de la soberanía.

El presente documento propone una reforma estructural al Código Orgánico Integral Penal (COIP) mediante la creación de un **marco jurídico intermedio**, que permita una respuesta estatal eficaz sin erosionar el Estado de derecho.

ANTECEDENTES

En el análisis previo (6 de abril de 2026), se evidenció la crisis de legitimidad del multilateralismo frente a amenazas no convencionales. La rigidez interpretativa de ciertos organismos internacionales, al no reconocer plenamente la naturaleza del CANI en Ecuador, ignora indicadores objetivos como la tasa de homicidios, que supera la letalidad de conflictos armados tradicionales.

En este contexto, el Estado ecuatoriano se ha visto obligado a operar en una zona gris donde el ordenamiento jurídico ordinario no logra contener dinámicas criminales altamente adaptativas.

ANÁLISIS DEL CANI Y LA ANOMALÍA JURÍDICA

En Ecuador, estamos viendo una colisión entre la conducción política (dirección de la guerra), la conducción de la estrategia militar (guerra interna) y la ortodoxia jurídica internacional. Esto se puede visualizar en el

núcleo de la "zona gris" del método Osmov en donde el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), reclaman su espacio.

La Corte Constitucional del Ecuador (CC) ha establecido criterios relevantes:

Autonomía del CANI. La Corte aclaró que la existencia de un Conflicto Armado Interno es una situación de hecho, no de derecho decretado. Es decir, el CANI puede existir independientemente de si hay un Estado de Excepción o no.

Validación de la Causal. La CC validó que el presidente tiene la facultad de reconocer un CANI cuando se cumplen dos requisitos: 1) Organización del grupo armado y 2) Intensidad de las hostilidades.

Separación de Ámbitos. La Corte ha enfatizado que, aunque se declare un CANI para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), esto NO suspende automáticamente los Derechos Humanos. Las FF.AA. deben regirse por el DIH en el combate, pero el Estado sigue obligado por el DIDH frente a la población civil.

La Anomalía:

Surge una tensión central:

¿Se trata de terrorismo o de beligerancia?

El Estado ha adoptado una doble calificación: Grupos como "terroristas" (derecho penal) y escenario como CANI (derecho de la guerra)

Esto genera tres problemas:

El dilema del nombre. Al etiquetar a los grupos como terroristas y simultáneamente declarar un CANI, el gobierno buscó aplicar la fuerza militar contra sujetos que el derecho internacional suele considerar delincuentes (sujetos a juicio).

El vacío doctrinario. El DIH tradicional está diseñado para grupos que buscan poder político. Al aplicarlo a grupos cuya motivación es el lucro criminal, Ecuador está forzando una actualización "de facto" de las reglas de la guerra.

Extensión de la excepcionalidad.

Normalización de los Estados de Excepción como política pública.

La Corte Constitucional ha advertido repetidamente que:

La "Normalización" de la Excepción: En 2024 y 2025, Ecuador ha pasado la mayor parte del tiempo bajo estados de excepción. La CC señala que esto es una señal de que el sistema ordinario del control interno y la justicia ha fallado.

Abuso de la figura: La Corte ha empezado a poner límites, indicando que no se puede usar el "Estado de Excepción" como una política de seguridad a largo plazo, ya que esto erosiona la democracia y las garantías ciudadanas.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El riesgo de la "Eternización" del Conflicto. Al declarar un CANI por decreto sin que existan frentes de batalla claros (como en una guerra clásica) permite que el Estado mantenga a los militares en las calles por tiempo indefinido, erosione su moral, debilite sus capacidades operacionales y exija una rotación más activa del personal empleado lo cual no soluciona el problema de fondo (corrupción, pobreza, falta de inteligencia criminal).

La trampa del "Estatus". Elevar a los grupos criminales a categoría de actores beligerantes puede generar efectos jurídicos indeseados, incluyendo futuras reclamaciones de estatus político o protecciones especiales que no les corresponden como criminales comunes.

La Necesidad de Reformas. La solución real no es "estirar" el DIH hasta que se rompa, sino fortalecer el derecho interno para que la Policía Nacional y la Justicia puedan actuar contra la delincuencia organizada transnacional sin necesidad de declarar una guerra formal.

ANÁLISIS MULTIDOMINIO

1. Dominio Legal (dominante). La arquitectura legal actual sufre de una "esquizofrenia normativa". El COIP es un

instrumento para ciudadanos, pero se le pide procesar a "enemigos".

Lo Real: El Estado aplica el Derecho Penal del Enemigo de facto mediante decretos de Estado de Excepción.

Lo Legal: La Constitución y los tratados internacionales exigen garantías procesales plenas, creando un vacío de protección legal para el uniformado.

2. Dominio Militar. Las Fuerzas Armadas han sido desplazadas de su rol estratégico a un rol policial de choque permanente, generando incompatibilidades doctrinarias.

Impacto: El uso de la fuerza letal como primer recurso (lógica DIH) colisiona con la obligación policial de la captura. Esto genera un desgaste institucional y el riesgo de procesos judiciales por violaciones a los DD.HH. al finalizar el conflicto.

3. Dominio Social. La población percibe la seguridad como un servicio reactivo y no como un sistema de resiliencia.

Impacto: Existe una "normalización" de la excepción. La sociedad civil delega su seguridad a la presencia militar, debilitando el tejido social y la confianza en la justicia ordinaria.

4. Dominio Económico. El crimen organizado opera bajo una lógica de mercado: máxima rentabilidad, mínimo riesgo.

Impacto: Mientras el Estado gasta recursos en combate físico, las estructuras financieras del crimen permanecen intactas. La falta de una extinción de dominio ágil convierte el esfuerzo militar en un gasto infinito.

5. Dominio Político. La seguridad se ha vuelto una herramienta de gestión de crisis diaria, no de planificación prospectiva.

Impacto: La dependencia del Estado de Excepción como método de gobierno erosiona la institucionalidad y cede ante las presiones internacionales de organismos que no viven la realidad del territorio.

6. Dominio Tecnológico. Existe una brecha entre la capacidad de comunicación/armamento de los GDO y el

marco legal para el uso de tecnologías de vigilancia.

Impacto: El Estado tiene la tecnología, pero el COIP limita su uso probatorio sin autorizaciones judiciales que, por los tiempos de la zona gris, suelen llegar tarde.

EL ESTADO DE HECHO: ANOMALÍA COIP

DERECHOS CIUDADANOS (COOPERATIVISMO)

MEDIDAS DE EXCEPCIÓN (CAIN POR DECRETO: FF.AA. EN CALLES)

LA ZONA GRIS DE OSMOV

OPERACIÓN MILITAR vs. PROCESAMIENTO PENAL

ANOMALÍA: Militares actúan bajo DIH (neutralización), pero COIP juzga bajo DIDHH (captura).

RUTA DE MEJORA: SEGURIDAD COOPERATIVA MULTIDIMENSIONAL

A. COIP REFORMADO: Derecho Penal Intermedio: Procedimientos especiales y aislamiento total para GDO sin CANI (A: Policía, Jueces Especializados).

Alessandro Baratta: Necesidad de crítica a la criminología tradicional para una respuesta legal racional.

B. INTELIGENCIA FINANCIERA (UAFE): "Seguir el Dinero" como arma de asfixia (A: Extinción de Dominio, Cooperación Internacional).

C. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL: "Seguridad Cooperativa" para eliminar santuarios regionales (A: Fiscalías regionales, Inteligencia compartida).

D. PROFESIONALIZACIÓN JUDICIAL: "Jueces sin Rostro": Un Juez Antiterroristas de Alta, con Protección y Autonomía.

CONCLUSIÓN OSMOV: El Derecho Penal del Enemigo debe ser un límite que la ley no cruce. La reforma del COIP debe apuntar a la EFICACIA CIVIL y la COOPERACIÓN GLOBAL para desmilitarizar la respuesta y evitar el CONFLICTO ETERNO.

General Oswaldo Moreno
Método Mental Sistémico by Osmov 5D, AAI

CONCLUSIONES

1. El COIP actual es incapaz de procesar amenazas asimétricas sin vulnerar garantías o forzar excepciones.
2. La falta de un marco penal intermedio mantiene a las FF.AA. en un limbo jurídico.
3. El uso permanente de FF.AA. en seguridad ciudadana genera atrofia operativa.
4. La doctrina militar no encaja con los procedimientos de la fiscalía civil.
5. El miedo ha desplazado la participación ciudadana en la seguridad.
6. El Estado de Excepción permanente genera fatiga social.
7. La estructura financiera del crimen es el verdadero motor del conflicto eterno.
8. El decomiso de bienes es lento e ineficiente.

9. La soberanía nacional está supeditada a interpretaciones externas de organismos multilaterales.
10. El Ejecutivo carece de herramientas ordinarias para crisis extraordinarias.
11. La burocracia judicial impide el uso efectivo de inteligencia técnica.
12. Los GDO operan con mayor agilidad tecnológica que el aparato estatal.

RECOMENDACIONES

Reformas penales y procesales

1. Crear una categoría de "Delincuencia de Alta Intensidad" en el COIP con jueces especializados y sin rostro.
2. Tipificar el terrorismo criminal transnacional con tratamiento diferenciado como delito de lesa humanidad interno para evitar prescripciones.
3. Reformar mecanismos de interceptación con control judicial adecuado.

Reformas institucionales y operativas

4. Establecer unidades híbridas de inteligencia operativa.
5. Definir protocolos claros de actuación bajo DIH en zonas específicas a fin de evitar la creación de áreas liberadas.
6. Fortalecer el COSEPE como órgano de asesoramiento permanente del ejecutivo, institucionalizando la desaparecida Secretaría Nacional de Seguridad a fin de -entre otras cosas- estandarizar la doctrina de Seguridad Nacional.
7. Liderar una iniciativa regional de "Seguridad Cooperativa" para homologar la persecución del crimen transnacional.

Reformas económicas y financieras

8. Aprobar una Ley de Extinción de Dominio inmediata que actúe sobre la posesión de bienes ilícitos sin sentencia penal previa.
9. Crear una unidad de élite UAFE con capacidades operativas en tiempo real.

Reformas tecnológicas y de seguridad

10. Invertir en ciberdefensa y sistemas de trazabilidad biométrica en toda la frontera y en los centros penitenciarios.
11. Reformar el COIP para permitir la interceptación de comunicaciones de grupos terroristas con validación judicial *a posteriori*.

Reformas sociales y estratégicas

12. Implementar programas de defensa civil y resiliencia comunitaria.
13. Reorientar la narrativa hacia la recuperación del orden y no guerra.

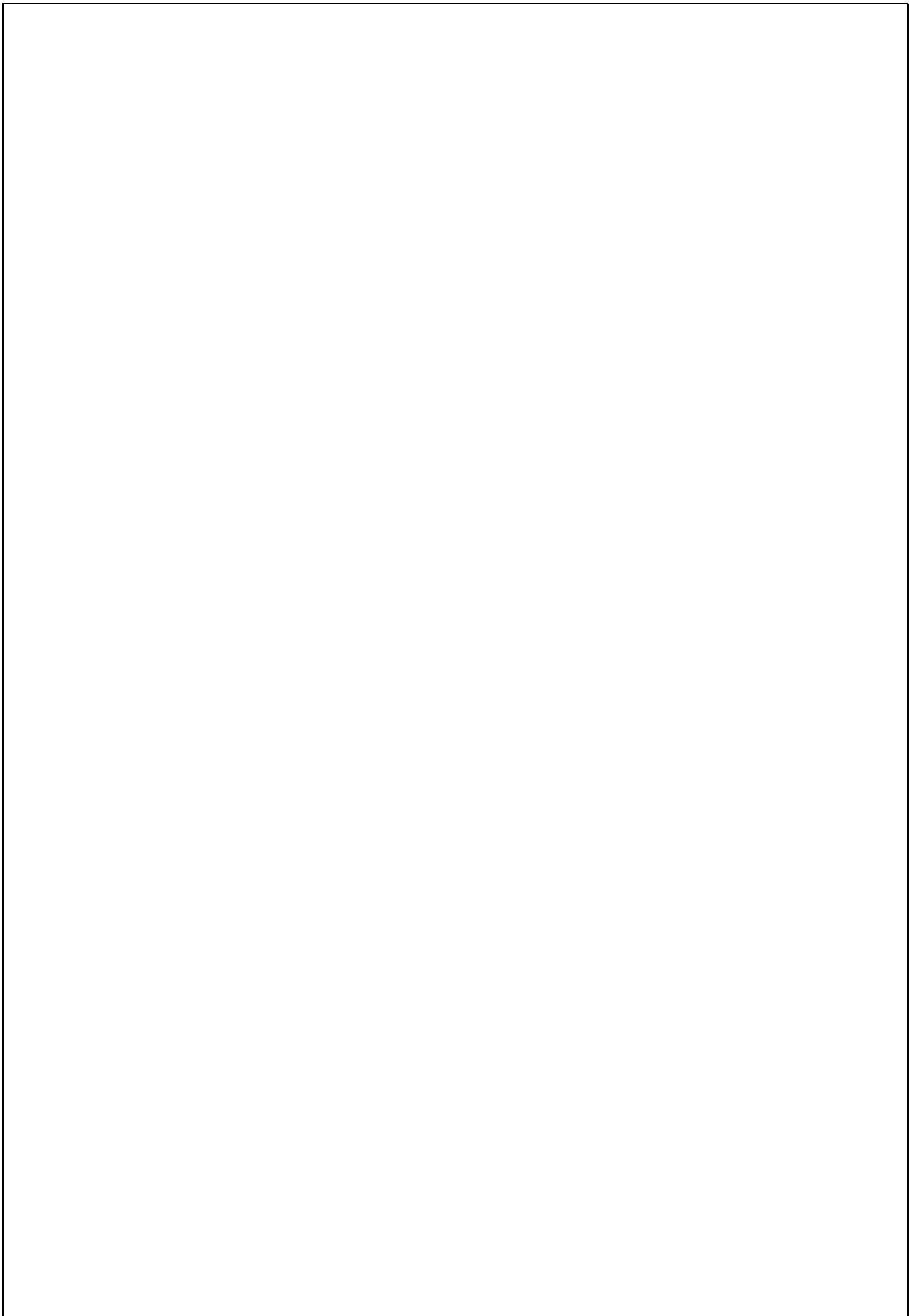
NOTA DE CIERRE DEL AUTOR

La presente propuesta no responde a una postura ideológica, sino a un equilibrio técnico entre corrientes doctrinales. Integra visiones tanto del derecho penal del enemigo como del garantismo, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del Estado y proteger a sus Fuerzas Armadas dentro de un marco jurídico claro y eficaz.

Referencias:

- Ambos, K. (2022). Antiterrorismo y derecho penal del enemigo. Marcial Pons.
- Baratta, A. (2004). Criminología crítica. Siglo XXI.
- Cancio Meliá, M. (2003). Derecho penal del enemigo. Civitas.
- Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón. Trotta.
- Jakobs, G. (2003). Derecho penal del enemigo. Civitas.
- Schmitt, C. (1932). El concepto de lo político. Alianza.
- Zaffaroni, E. (2006). El enemigo en el derecho penal. Ediar.
- Corte Constitucional del Ecuador. Dictámenes 2024–2025.
- Freedman, L. (2019). Estrategia: una historia.
- Muggah, R. (2017). Urban violence in the 21st century.
- Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra (1949).

osmov@hotmail.com



THE COIP AND THE GRAY ZONE IN ECUADOR

Legal-strategic diagnosis and reform proposal

General Oswaldo Moreno
ASOCID — ECUADOR
Quito, April 9, 2026



Systemic Mental Method by Osmov 5D, AAI

When the conduct of armed conflict becomes uncertain, commanders recognize that they enter what Clausewitz called the “fog of war”: the confusion that prevents a clear understanding of the real development of events. Added to this is the “friction of war,” which explains why plans are rarely executed as they were conceived.

*From a military legal perspective, this space translates into what we call the **legal gray zone**: a territory of undefined boundaries where police carry out military missions, the military assume police functions, politicians intervene in matters proper to generals; and generals are forced to navigate between order and chaos under political pressure.*

General Oswaldo Moreno
I Hemispheric Convention on Security and Defense
Madrid, September 18, 2025

QUITO — Ecuador currently faces a critical asymmetry between international norms and internal criminal phenomenology. The declaration of an **Internal Armed Conflict (IAC)** has generated a scenario in which state forces operate under war logics but are judged under legal frameworks designed for peacetime contexts.

This tension has placed the State in a structural gray zone, where the current legal framework is insufficient to confront transnational, unstructured, and intermestic criminal threats aimed at territorial control and the weakening of sovereignty.

This document proposes a structural reform of the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP) through the creation of an intermediate legal framework that allows for an effective state response without eroding the rule of law.

BACKGROUND

In the previous analysis (April 6, 2026), the crisis of legitimacy of multilateralism in the face of non-conventional threats was identified. The interpretative rigidity of certain international bodies, by not fully recognizing the nature of the IAC in Ecuador, ignores objective indicators such as the homicide rate, which exceeds the lethality of traditional armed conflicts.

In this context, the Ecuadorian State has been forced to operate in a gray zone where the ordinary legal system fails to contain highly adaptive criminal dynamics.

ANALYSIS OF THE IAC AND THE LEGAL ANOMALY

In Ecuador, we are witnessing a collision between political leadership (direction of war), military strategic conduct (internal war), and international legal orthodoxy. This can be visualized at the core of the Osmov method’s “gray zone,” where International Humanitarian Law (IHL) and International

Human Rights Law (IHRL) compete for primacy.

The Constitutional Court of Ecuador (CC) has established relevant criteria:

Autonomy of the IAC. The Court clarified that the existence of an Internal Armed Conflict is a factual situation, not a formally decreed legal condition. That is, an IAC may exist regardless of whether a State of Exception has been declared.

Validation of the Cause. The CC validated that the president has the authority to recognize an IAC when two requirements are met:

1. Organization of the armed group and
2. Intensity of hostilities.

Separation of Spheres. The Court has emphasized that, although an IAC may be declared to allow the intervention of the Armed Forces (FF.AA.), this does NOT automatically suspend Human Rights. The Armed Forces must be governed by IHL in combat, but the State remains bound by IHRL toward the civilian population.

The Anomaly

A central tension emerges:

Is it terrorism or belligerency?

The State has adopted a dual classification: Groups as “terrorists” (criminal law) and the scenario as an IAC (law of war).

This generates three problems:

The naming dilemma. By labeling groups as terrorists while simultaneously declaring an IAC, the government sought to apply military force against subjects whom international law generally considers criminals (subject to trial).

The doctrinal gap. Traditional IHL is designed for groups seeking political power. By applying it to groups motivated by criminal profit, Ecuador is forcing a “de facto” update of the rules of war.

Extension of exceptionality.

Normalization of States of Exception as public policy.

The Constitutional Court has repeatedly warned that:

Normalization of the Exception. In 2024 and 2025, Ecuador has spent most of its time under states of exception. The CC indicates that this is a sign that the ordinary system of internal control and justice has failed.

Abuse of the mechanism. The Court has begun to set limits, indicating that the State of Exception cannot be used as a long-term security policy, as it erodes democracy and civil guarantees.

STRUCTURAL ANALYSIS

The risk of the “eternalization” of the conflict. Declaring an IAC by decree without clearly defined battlefronts (as in a classical war) allows the State to keep the military on the streets indefinitely, erode morale, weaken operational capabilities, and demand constant personnel rotation, which does not solve underlying problems (corruption, poverty, lack of criminal intelligence).

The “status” trap. Elevating criminal groups to the category of belligerent actors may generate unintended legal consequences, including future claims to political status or special protections that do not correspond to common criminals.

The need for reforms. The real solution is not to “stretch” IHL until it breaks, but to strengthen domestic law so that the National Police and the Justice system can act against transnational organized crime without the need to declare a formal war.

MULTI-DOMAIN ANALYSIS

1. Legal domain (dominant). The current legal architecture suffers from “normative schizophrenia.” The COIP is an instrument for citizens, yet it is required to process “enemies.”

Reality: The State applies Enemy Criminal Law de facto through States of Exception.

Legality: The Constitution and international

treaties require full procedural guarantees, creating a legal protection gap for uniformed personnel.

2. Military domain. The Armed Forces have been shifted from their strategic role to a permanent shock policing role, generating doctrinal incompatibilities.

Impact: The use of lethal force as a primary tool (IHL logic) clashes with the police obligation of capture, generating institutional strain and the risk of human rights litigation after the conflict.

3. Social domain. The population perceives security as a reactive service rather than a resilience system.

Impact: There is a normalization of exceptionality. Civil society delegates its security to military presence, weakening social fabric and trust in ordinary justice.

4. Economic domain. Organized crime operates under a market logic: maximum profit, minimum risk.

Impact: While the State spends resources on physical combat, the financial structures of crime remain intact. The lack of agile asset forfeiture turns military effort into an infinite expense.

5. Political domain. Security has become a tool of daily crisis management rather than long-term planning.

Impact: Dependence on the State of Exception as a governance method erodes institutional strength and yields to international pressures disconnected from territorial realities.

6. Technological domain. There is a gap between the technological capabilities of organized crime groups and the legal framework for the use of surveillance technologies.

Impact: The State has the technology, but the COIP limits its evidentiary use due to judicial authorizations that often arrive too late in gray zone conditions.

THE COIP AND THE GRAY ZONE IN ECUADOR

DE FACTO STATE: COIP ANOMALY	OSMOV GRAY ZONE	IMPROVEMENT PATH: MULTILATERAL COOPERATIVE SECURITY
CITIZENS' RIGHTS (GUARANTEES) STATES OF EXCEPTION (ARMED FORCES IN THE STREETS) Günther Jakobs: Treats the delinquent as a "non-person" (enemy), anticipating punishment and recalling pre-guarantee frameworks. Carl Schmitt: The distinction friend-enemy defines politics, justifying the struggle against the existential enemy.	MILITARY OPERATION vs. CRIMINAL PROSECUTION ANOMALY: Military neutralize under IHL, but COIP judges under IHRL (capture) Luigi Ferrajoli: Criminal Law of the Enemy is a negation of the guarantee-based system, subordinating individual dignity. Zaffaroni: Risk of social stigmatization and expansion of the enemy category. Cancio Meliá and Kai Ambos: Tensions with principles of legality and proportionality in the face of organized crime.	A. COIP REFORM Intermediate Criminal Law: special procedures and isolation for GDO within IAC. (Police, specialized judges) B. FINANCIAL INTELLIGENCE (UAFE): Follow the money as a suffocation weapon (Asset forfeiture, agile measures) C. TRANSNATIONAL COOPERATION: Regional cooperative security to eliminate safe havens (Regional prosecutors, shared intelligence) D. JUDICIAL PROFESSIONALIZATION: Faceless judges or high-security anti-terror judges, with protection and autonomy.
CONCLUSION:		
Enemy Criminal Law must be a limit that law does not cross. COIP reform must aim at CIVIL EFFECTIVENESS and GLOBAL COOPERATION to demilitarize the response and avoid PERPETUAL CONFLICT.		
General Oswaldo Moreno Systemic Mental Method by Osmov SD, AAI		

CONCLUSIONS

1. The current COIP cannot process asymmetric threats without violating guarantees or forcing exceptions.
2. The absence of an intermediate legal framework leaves the Armed Forces in a legal limbo.
3. The permanent use of the Armed Forces in public security generates operational atrophy.
4. Military doctrine does not align with civilian prosecutorial procedures.
5. Fear has displaced citizen participation in security.
6. Permanent States of Exception generate social fatigue.
7. The financial structure of crime is the true engine of perpetual conflict.
8. Asset forfeiture mechanisms are slow and inefficient.

9. National sovereignty is conditioned by external interpretations from multilateral bodies.
10. The Executive lacks ordinary tools for extraordinary crises.
11. Judicial bureaucracy limits the effective use of technical intelligence.
12. Organized crime operates with greater technological agility than the State.

RECOMMENDATIONS

Criminal and procedural reforms

1. Create a category of **High-Intensity Criminality** within the COIP with specialized and anonymous judges.
2. Classify transnational criminal terrorism as an internal crime against humanity to avoid statutes of limitation.
3. Reform interception mechanisms with adequate judicial control.

Institutional and operational reforms

4. Establish hybrid operational intelligence units.
5. Define clear IHL-based operational protocols in specific zones to prevent the emergence of ungoverned areas.
6. Strengthen COSEPE as a permanent advisory body to the Executive, institutionalizing the former National Security Secretariat.
7. Lead a regional “Cooperative Security” initiative to standardize the fight against transnational crime.

Economic and financial reforms

8. Approve an immediate asset forfeiture law targeting illicit possession without prior criminal conviction.
9. Create an elite UAFE unit with real-time operational capabilities.

Technological and security reforms

10. Invest in cyber defense and biometric traceability systems across borders and prisons.

11. Reform the COIP to allow interception of terrorist communications with ex post judicial validation.

Social and strategic reforms

12. Implement civil defense and community resilience programs.
13. Reframe the narrative toward restoration of order rather than war.

AUTHOR’S FINAL NOTE

This proposal does not respond to an ideological stance, but to a technical balance between doctrinal approaches. It integrates both enemy criminal law and garantist perspectives, aiming to strengthen State institutions and protect the Armed Forces within a clear and effective legal framework.

REFERENCES

- Ambos, K. (2022). *Antiterrorism and enemy criminal law*. Marcial Pons.
- Baratta, A. (2004). *Critical criminology*. Siglo XXI.
- Cancio Meliá, M. (2003). *Enemy criminal law*. Civitas.
- Ferrajoli, L. (2011). *Law and reason*. Trotta.
- Jakobs, G. (2003). *Enemy criminal law*. Civitas.
- Schmitt, C. (1932). *The concept of the political*. Alianza.
- Zaffaroni, E. (2006). *The enemy in criminal law*. Ediar.
- Constitutional Court of Ecuador. Rulings 2024–2025.
- Freedman, L. (2019). *Strategy: A history*.
- Muggah, R. (2017). *Urban violence in the 21st century*.
- Additional Protocol II to the Geneva Conventions (1949).

osmov@hotmail.com